Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión número **01930/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por la **C. XXXXXXXXXXX,** en lo sucesivo **El Recurrente**, en contra de la respuesta del **Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango**, en lo subsecuenteel **Sujeto Obligado**,se procede a dictar la presente resolución.

**A N T E C E D E N T E S D E L A S U N T O**

**PRIMERO.** **De la Solicitud de Información.**

En fecha catorce de marzo de dos mil veinticuatro, el **Recurrente**, presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (**SAIMEX),** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número de expediente **00135/HRZUM/IP/2024**, mediante la cual solicitó lo siguiente:

*“Solicito del hraez información respecto a el procedimiento debidamente validado para realizan el correcto manejo,distribución y dispensación del medicamento denominado fentanilo y todas las recetas o notas medicas emitidas por personal del hraez donde se aprecie la firma del médico que receta dicho medicamento, de los años 2021,2022,2023 y 2024.” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** A través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX).**

**SEGUNDO. De la respuesta del Sujeto Obligado.**

De las constancias que obran en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), se advierte que en fecha doce de abril de dos mil veinticuatro, el **Sujeto Obligado** notificó la siguiente respuesta:

*“Folio de la solicitud: 00135/HRZUM/IP/2024*

*En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*Se proporciona Respuesta Solicitud de Transparencia 00135/HRZUM/IP/2024 En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que: Con fundamento en lo previsto por los artículos 2 fracción II y VII, 4 párrafo tercero, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, fracción I, 24, fracción XI y último párrafo, 50, 51, 52, 53 fracciones II, IV, V y VI, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (LTAIPEMyM); en atención a la solicitud de acceso a la información pública, recibida por este Sujeto Obligado; sírvase encontrar adjunto los archivos que detallan de forma precisa el requerimiento recibido. Con el acto, se cumple en tiempo y forma asegurándose así el derecho de acceso a la información pública de la persona solicitante. También, se le notifica que, en caso de estar inconforme con la respuesta a la presente solicitud de acceso a la información, y con fundamento en los artículos 176, 177, 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, Usted puede ejercer la garantía secundaria de acceso a la información pública en la forma del recurso de revisión, debiendo interponer éste en los siguientes 15 días hábiles posteriores a entrega de la presente respuesta.*

*ATENTAMENTE*

*Lic. Montserrat Cárdenas Rodríguez “(Sic).*

Adjuntando los archivos electrónicos denominados *“MMU.5 MMU-PRO-002 ALMACENAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS.pdf”, “198.pdf”, “MMU.7 MMU-PRO-004 DISTRIBUCIÓN DISPENSACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS.pdf”, y “00135.pdf”*; mismos que no se reproduce por ser del conocimiento de las partes, sin embargo, serán materia del estudio en el **CONSIDERADO** respectivo.

**TERCERO. Del recurso de revisión.**

Inconforme con la respuesta notificada por el **Sujeto Obligado**, el **Recurrente** interpuso el presente recurso de revisión, en fecha quince de abril de dos mil veinticuatro, el cual fue registradoen el sistema electrónico con el expediente número **01930/INFOEM/IP/RR/2024**, en el cual arguye, las siguientes manifestaciones:

1. **Acto Impugnado:**

*“Negativa de entregar la informacion solicitada” [Sic].*

1. **Razones o Motivos de Inconformidad**:

*“La información entregada no corresponde a lo solicitado, además no hay firma de que unidad administrativa lo informa, únicamente se aprecian unos sellos sin advertirse que área proporciono la información y que validara la entrega mediante oficio lo que se entrega, y no corresponde al periodo solicitado, ni tampoco las documentales solicitadas al menos en una versión publica. No cumple con lo que se solicitó.” [Sic].*

**CUARTO. Del turno del recurso de revisión.**

Medio de impugnación que le fue turnado al Comisionado Presidente **José Martínez Vilchis**, por medio del sistema electrónico en términos del numeral 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, al cual recayó acuerdo de admisión de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, otorgándose en él un plazo de siete días para que las partes manifestaran lo que a su derecho corresponda en términos del numeral ya citado.

**QUINTO. De la etapa de instrucción.**

Durante la etapa de instrucción, se observa que en fechas veintiséis y veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado rindió su Informe Justificado mediante el documento denominado “R. REVIS. 00135.pdf” y “Oficio 271 (1).pdf”, los cuales fueron puestos a la vista del Recurrente mediante acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil veinticuatro, en términos de la fracción III del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, otorgando al particular un término de tres días para manifestar lo que a su derecho conviniera. Por su parte, el Recurrente no emitió manifestaciones, vertió alegatos ni presentó pruebas que a su derecho convinieran, así como tampoco se pronunció respecto del Informe rendido por el Sujeto Obligado. El contenido de los documentos referidos será analizado durante el estudio correspondiente.

## SEXTO. De la ampliación del término para resolver.

En fecha cuatro de junio de dos mil veinticuatro, se amplió el término para resolver el recurso de revisión por el término de quince días hábiles adicionales, en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación dado el alto número de recursos de revisión que se ha incrementado aproximadamente un 400 %, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro «TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO», visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

«PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO», consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

«PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS», visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

## Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.

## SÉPTIMO. Del cierre de instrucción.

Una vez transcurrido el término legal, se decretó el cierre de instrucción en fecha once de junio de dos mil veinticuatro, en términos del artículo 185 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, iniciando el término legal para dictar resolución definitiva del asunto.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. De la competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por el Recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 10, 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Sobre los alcances del recurso de revisión.**

Derivado de la impugnación realizada, es menester señalar que el recurso de revisión inmerso en la Ley de Transparencia vigente en la entidad, tiene el fin y alcance que señalan los numerales 176, 179, 181 párrafo cuarto, 194 y 195 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el cual será analizado conforme a las actuaciones que obren en el expediente electrónico, con la finalidad de reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública y garantizando el principio rector de máxima publicidad.

**TERCERO. De las causas de improcedencia.**

En el procedimiento de acceso a la información y de los medios de impugnación de la materia, se advierten diversos supuestos de procedibilidad que deben estudiarse con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad inmersos en el artículo 9 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en correlación con la seguridad jurídica que debe generar lo actuado ante este Organismo garante.

Por lo anterior, es una facultad legal entrar al estudio de las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio por este Resolutor y por ende objeto de análisis previo al estudio de fondo del asunto; presupuestos procesales de inicio o trámite de un proceso que dotan de seguridad jurídica las resoluciones, máxime que es una figura procesal adoptada en la ley de la materia[[1]](#footnote-2), la cual permite dilucidar alguna causal que impida el estudio y resolución, cuando una vez admitido el recurso de revisión se advierta una causa de improcedencia que permita sobreseerlo, sin estudiar el fondo del asunto.

Así las cosas, en la especie, no se actualiza ninguna causa de improcedencia de las referidas en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, encontrándose actualizados todos los presupuestos procesales para atender el fondo del asunto, en los términos del considerando posterior.

**CUARTO. Estudio y resolución del asunto.**

El análisis y resolución del presente recurso, se funda en el contenido íntegro de las actuaciones que obran en el expediente electrónico, para que así, este Órgano Colegiado esté en posibilidad dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en nuestra Constitución Federal, Local y demás leyes aplicables en la materia, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en concordancia con el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Federal y el diverso 8 de la Ley de Transparencia local.

En este sentido nuestro estudio versará en determinar si la información remitida mediante respuesta, colma el derecho de acceso a la información solicitado por la parte **Recurrente**, para ello analizaremos lo solicitado y la información proporcionada.

Una vez establecido lo anterior, es conveniente recordar que el hoy **Recurrente** requirió del Sujeto Obligado, medularmente lo siguiente:

1. Procedimiento debidamente validado para realizan el correcto manejo, distribución y dispensación del medicamento denominado fentanilo
2. todas las recetas o notas médicas emitidas por personal del hraez donde se aprecie la firma del médico que receta dicho medicamento, de los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Derivado de lo anterior, es de mencionarse que fueron formulados **2 -dos-** requerimientos respecto de los cuales en el primero no fue señalado parámetro de inicio y conclusión para efectos de búsqueda de la información, debiendo de ser fijados a la fecha en que se ejerció el derecho de acceso a la información, es decir, al catorce de marzo de dos mil veinticuatro. Respecto al segundo requerimiento el ahora recurrente estableció como elemento temporal “2021, 2022, 2023 y 2024” sin embargo al tratarse de hechos futuros se determinó que el elemento temporal será fijado el día en que se ejercicio el derecho al acceso a la información, quedando en los en los términos siguientes:

1. Procedimiento debidamente validado para realizan el correcto manejo, distribución y dispensación del medicamento denominado fentanilo, al catorce de marzo de dos mil veinticuatro.
2. Todas las recetas o notas médicas emitidas por personal del hraez donde se aprecie la firma del médico que receta dicho medicamento, del periodo comprendido del primero de enero de dos mil veintiuno al catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

A lo que el **Sujeto Obligado** remitió en respuesta los archivos denominados *“MMU.5 MMU-PRO-002 ALMACENAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS.pdf”, “198.pdf”, “MMU.7 MMU-PRO-004 DISTRIBUCIÓN DISPENSACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS.pdf”, “00135.pdf”*; que contiene información, la cual se describe a continuación:

* **MMU.5 MMU-PRO-002 ALMACENAMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS.pdf**: Documento de treinta y ocho fojas mediante el cual se adjunta el procedimiento de almacenamiento de los medicamentos MMU-PRO-002.
* **198.pdf**: Consta del oficio 208C041020300L/198/2024, de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, mediante el cual respecto a lo solicitado referente al *“…procedimiento debidamente validado para realizar el correcto manejo, distribución y dispensación del medicamento denominado fentanilo…”,* el Sujeto Obligado refiere que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en la Subdirección de Desarrollo y Calidad del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, se proporciona la información requerida por el solicitante con las especificaciones requeridas.
* **MMU.7 MMU-PRO-004 DISTRIBUCIÓN DISPENSACIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS.pdf:** Documento de treinta y seis fojas el cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para distribuir, dispensar y preparar medicamentos en un entorno seguro e higiénico, acorde a la legislación aplicable vigente.
* **00135.pdf:** Contiene el oficio número 208C0401010000L/0319/2024, de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, mediante el cual el director médico respecto a *“…todas las recetas o notas medicas…”*, se hace del conocimiento que de acuerdo a lo estipulado en los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud, mediante las cuales refiere que las recetas para medicamentos se considera información confidencial. Derivado de lo anterior, refiere que los medicamentos de la fracción I del artículo 226 de la LGS dice que: los medicamentos deberán prescribirse en recetas especiales con código de barras emitido por médicos autorizados, de acuerdo a lo indicado en el capítulo Receta Médica, así mismo refiere el procedimiento para surtir las recetas electrónicas, mismo que se describe a continuación:
* Las recetas electrónicas surtidas por las farmacias autorizadas deberán registrarse en el portal para farmacias, en la liga electrónica <http://www.gob,mx/cofepris>, a la que se ingresa por segunda ocasión mediante el nombre de usuario y la contraseña asignados a la farmacia por COFEPRIS. Se repite proceso apara la validación de no surtir la receta con la clave alfanumérica del código bidimensional y el número de folio de la misma, seleccionando capturar receta para continuar el proceso y registrar los detalles de la prescripción y dispensación, por lo que, una vez surtida la receta, el médico prescriptor recibirá un correo electrónico de la COFEPRIS notificando que se entregó el medicamento al paciente.

Por lo que la Receta Médica Especial, en su formato del recetario especial, los médicos pueden obtener la autorización para prescribir estupefacientes, así como los recetarios autorizados de manera electrónica, en el portal para médicos de <http://www.gob.mx/cofepris/>, en el cual se encuentran las instrucciones para el trámite.

Las recetas especiales obtenidas cumplen con los requisitos siguientes:

1. Número de folio del original;
2. Fecha de prescripción;
3. Los datos del médico están incluidos en el bidimensional, y podrán ser consultados por el personal de la farmacia y el verificador sanitario en el portal de servicios de la COFEPRIS;
4. Datos del paciente;
5. Datos del medicamento.

Las recetas electrónicas deberán validarse en el portal para farmacias del portal COFEPRIS, para verificar que aún no han sido surtidas.

Las recetas para medicamentos de la fracción I tienen una vigencia de 30 días a partir de la fecha de la emisión y una vez surtida la receta, el médico prescriptor recibirá un correo electrónico de COFEPRIS notificando la entrega del medicamento al paciente.

Aunado a lo anterior también se adjunta el Manual de Procesos del Sistema de Manejo y Uso de Medicamentos.

Ante dicha respuesta, la parte Recurrente consideró que su derecho al acceso a la información había sido conculcado, por lo que interpuso el presente recurso de revisión dando como razones o motivos de inconformidad que:

*“La información entregada no corresponde a lo solicitado, además no hay firma de que unidad administrativa lo informa, únicamente se aprecian unos sellos sin advertirse que área proporciono la información y que validara la entrega mediante oficio lo que se entrega, y no corresponde al periodo solicitado, ni tampoco las documentales solicitadas al menos en una versión publica. No cumple con lo que se solicitó.” [Sic].*

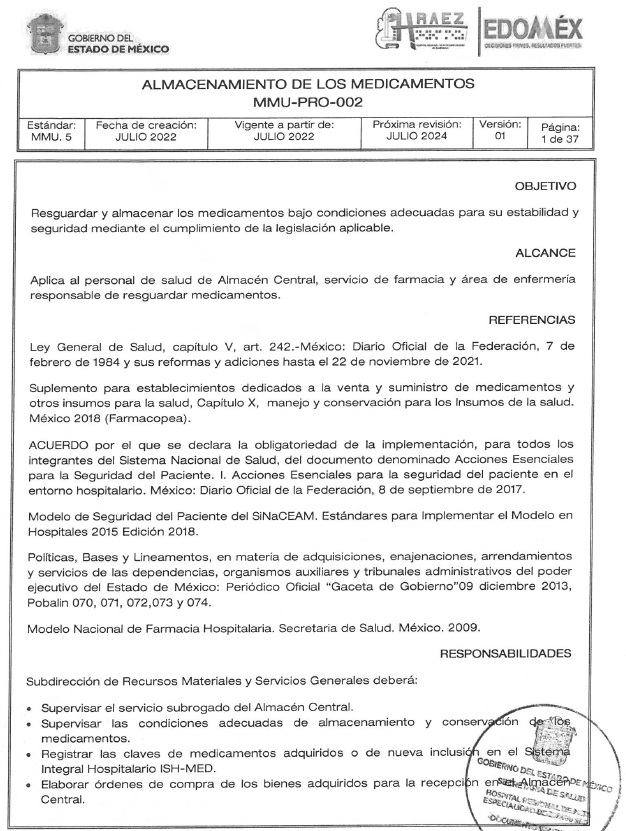
Posteriormente el Sujeto Obligado remite su Informe Justificado, a través de los archivos electrónicos denominados **“R. REVIS. 00135.pdf” y “Oficio 271 (1).pdf”**, mismos que se describen a continuación:

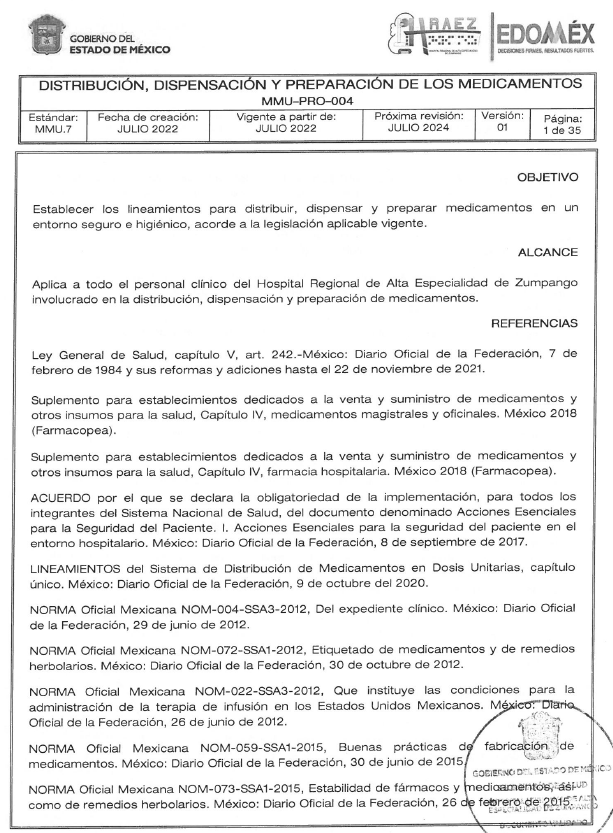
* **R. REVIS. 00135.pdf:** Consta del oficio número 208C0401010000L/0476/2024, de fecha veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, signado por el Director Médico, mediante el cual adjunta su Informe Justificado, mediante el cual medularmente ratifica su respuesta inicial, asimismo, adjunta los oficios remitidos en respuesta.
* **Oficio 271 (1).pdf:** Consta del oficio número 208C0401020300L/271/2024, de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, remitido por la Subdirectora de Desarrollo y Calidad, mediante el cual medularmente ratifica su respuesta inicial, a su vez, el Sujeto Obligado también refiere que queda abierta la invitación al solicitante para apersonarse ante la Subdirección de Desarrollo y Calidad, poniendo a su disposición la consulta de información de manera física en las instalaciones del Organismo en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00, a los teléfonos (591) 9177190 ext. 98126 o 98165.

Es así que respecto al punto 1, mediante el cual el ahora recurrente solita conocer sobre el correcto manejo, distribución y dispensación del medicamento, el Sujeto Obligado tuvo a bien adjuntar en respuesta diversos manuales, entre los cuales se encuentran el denominado Almacenamiento de los Medicamentos MMU-PRO-002, Manual de Procesos del Sistema de Manejo y Uso de Medicamentos, y Distribución, Dispensación y Preparación de los Medicamentos MMU-PRO-004, mismos que fueron descritos anteriormente, en los cuales tienen como objetivos:

* Reguardar y almacenar los medicamentos bajo condiciones adecuadas para su estabilidad y seguridad mediante el cumplimiento de la legislación aplicable.
* Establecer los lineamientos para distribuir, dispensar y preparar medicamentos mediante la distribución, dispensación y preparación de los medicamentos en un entorno seguro e higiénico, acorde a la legislación aplicable.
* Establecer los lineamientos para distribuir, dispensar y preparar medicamentos en un entorno seguro e higiénico, acorde a la legislación aplicable vigente.

Tal como se muestra a manera de ejemplo en las siguientes imágenes:





Es por esto que se da por colmado el punto uno, toda vez que al adjuntar los manuales remite los procedimientos para el correcto manejo, distribución y dispensación del medicamento denominado fentanilo.

Ahora bien, respecto al punto 2 de la solicitud de información, referente a las recetas o notas medicas emitidas por el personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, por un lado, se observa que el Director Médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, manifiesta que no se puede proporcionar la información solicitada por el particular, toda vez que con fundamento en la Ley General de Salud, la información referente a las recetas o notas médicas, se trata de información de carácter confidencial, tal como se muestra a continuación:

***Artículo 226.-*** *Los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran:*

***I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V de este Título;***

*II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma.*

*III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante determinará, el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión.*

*Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización a los pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios correspondientes, cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir en las farmacias;*

*IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;*

*V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias, y*

*VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias.*

*No podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.*

*El emisor de la receta médica prescribirá los medicamentos en su denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia informando al paciente sobre las opciones terapéuticas.*

***Artículo 234.-*** *Para los efectos de esta Ley, se consideran* ***estupefacientes****:*

*(…)*

*FENTANIL (1-fenetil-4-n-propionilanilinopiperidina).*

*(…)*

***Artículo 240.-*** *Sólo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan, siempre que tengan título registrado por las autoridades educativas competentes, cumplan con las condiciones que señala esta Ley y sus reglamentos y con los requisitos que determine la Secretaría de Salud:*

*I. Los médicos cirujanos;*

*II. Los médicos veterinarios, cuando los prescriban para la aplicación en animales, y*

*III. Los cirujanos dentistas, para casos odontológicos.*

*Los pasantes de medicina, durante la prestación del servicio social, podrán prescribir estupefacientes, con las limitaciones que la Secretaría de Salud determine.*

***Artículo 241.-*** *La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán, para su control, un código de barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales, en los siguientes términos:*

*I. Las recetas especiales serán formuladas por los profesionales autorizados en los términos del artículo 240 de esta ley, para tratamientos no mayores de treinta días, y*

*II. La cantidad máxima de unidades prescritas por día, deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del producto.*

***Artículo 242.-*** *Las prescripciones de estupefacientes a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán ser surtidas por los establecimientos autorizados para tal fin.*

*Los citados establecimientos recogerán invariablemente las recetas o permisos, harán los asientos respectivos en el libro de contabilidad de estupefacientes y entregarán las recetas y permisos al personal autorizado por la Secretaría de Salud, cuando el mismo lo requiera.*

*Únicamente se surtirán prescripciones de estupefacientes, cuando procedan de profesionales autorizados conforme al artículo 240 de esta ley y que contengan los datos completos requeridos en las recetas especiales y las dosis cumplan con las indicaciones terapéuticas aprobadas.*

Derivado de lo anterior, es necesario traer a colación lo establecido en el Reglamento de Insumos para la Salud, en sus artículos 28, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 50, 51, 52, que a la letra señalan:

***Prescripción***

***ARTÍCULO 28.*** *La receta médica es el documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y podrá ser emitida por:*

*I. Médicos;*

*II. Homeópatas;*

*III. Cirujanos dentistas;*

*IV. Médicos veterinarios, en el área de su competencia;*

*V. Pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras anteriores, y*

*VI. Enfermeras y parteras.*

*Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes, enfermeras y parteras podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.*

***ARTÍCULO 29.*** *La receta médica deberá contener impreso el nombre y el domicilio completos y el número de cédula profesional de quien prescribe, así como llevar la fecha y la firma autógrafa del emisor.*

***ARTÍCULO 30.*** *El emisor de la receta al prescribir, indicará la dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento.*

***ARTÍCULO 31.*** *El emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente:*

*I. Cuando se trate de los incluidos en el Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables a que hace referencia el artículo 75 de este ordenamiento, deberá anotar la Denominación Genérica y, si lo desea, podrá indicar la Denominación Distintiva de su preferencia, y*

*II. En el caso de los que no estén incluidos en el Catálogo referido en la fracción anterior, podrá indistintamente expresar la Denominación Distintiva o conjuntamente las Denominaciones Genérica y Distintiva.*

*Cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe*.

***Capítulo III***

***Estupefacientes y psicotrópicos***

***ARTÍCULO 44.*** *La obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, comercialización, importación, exportación, prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes y psicotrópicos, con excepción de los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo podrá realizarse con fines médicos y científicos, previa autorización de la Secretaría.*

***ARTÍCULO 45.*** *La guarda y custodia de materia prima o medicamentos que sean o contengan estupefacientes o psicotrópicos, es responsabilidad de quien los posea, mismo que deberá contar con los documentos oficiales que comprueben su tenencia legítima, los que deberá conservar durante un plazo de tres años.*

***ARTÍCULO 46.*** *Los Establecimientos públicos y privados que se destinen al proceso, importen, exporten o utilicen estupefacientes o psicotrópicos para uso humano contarán con libros de control autorizados por la Secretaría y con sistema de seguridad para su guarda y custodia.*

*Para los efectos del presente Reglamento se entiende por libros de control la compilación de registros gráficos obtenidos por cualquier sistema autorizado, siempre y cuando contengan los datos necesarios para el control de estupefacientes y psicotrópicos.*

***ARTÍCULO 50.*** *Únicamente podrán prescribir los medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta especial o con receta médica que debe retener la farmacia que la surta o con receta médica que puede surtirse hasta tres veces, los profesionales que a continuación se mencionan, siempre que tengan cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes:*

*I. Médicos;*

*II. Homeópatas;*

*III. Cirujanos dentistas, para casos odontológicos, y*

*IV. Médicos veterinarios, cuando los prescriban para aplicarse en animales.*

***ARTÍCULO 51.*** *Los profesionales interesados en obtener el código de barras para los recetarios especiales de prescripción de estupefacientes, presentarán solicitud en el formato que al efecto autorice la Secretaría, acompañada de la siguiente documentación:*

*I. Copia certificada de la cédula profesional, que los acredite como profesionales en alguna de las ramas a que se refiere el artículo anterior;*

*II. Copia de identificación oficial, y*

*III. Escrito en original y dos copias, en papel membretado y firmado por el director de la institución, cuando se trate de instituciones hospitalarias, en el cual se especifique la designación de los profesionales responsables de la prescripción.*

*La Secretaría o las autoridades sanitarias estatales registrarán al profesional solicitante y le asignarán una cantidad determinada de claves en un código de barras, en un plazo de cinco días cuando se trate de la primera solicitud y de un día en las subsecuentes. En este último caso sólo se presentará la solicitud.*

***ARTÍCULO 52.*** *Los profesionales autorizados conforme al artículo anterior, prescribirán los medicamentos en recetarios especiales, en original y copia, los cuales contendrán los siguientes datos:*

*I. El número de folio y la clave expresada en código de barras con la identificación del médico;*

*II. El nombre, domicilio, número de cédula profesional, especialidad, en su caso, y firma autógrafa del médico;*

*III. El número de días de prescripción del tratamiento, presentación y dosificación del medicamento;*

*IV. La fecha de prescripción, y*

*V. El nombre, domicilio y el diagnóstico del paciente.*

*El médico autorizado mandará imprimir los recetarios especiales, en el momento y con las especificaciones que al respecto señale la Secretaría.*

Atento a lo anterior, resulta claro que existe fuente obligacional que constriñe al Sujeto Obligado a generar administrar y poseer la información interés del Particular, en consecuencia, la información solicitada; debe obrar en los archivos del Sujeto Obligado. En este sentido, de acuerdo a la naturaleza de la información solicitada se concluye que esta es de interés general y de alcance público, puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber los gastos realizados por los sujetos obligados, esto es, su acceso permite transparentar las erogaciones del servicio público.

En esos términos, es necesario establecer que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipio tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley en la Materia, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el párrafo vigésimo segundo, fracción VIII del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que a la letra señala:

*Artículo 5.*

*[…]*

*VIII.* ***El Estado contará con un organismo autónomo****, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna****, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley****.*

***El organismo autónomo garante previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados****.*

Es así que este Órgano Garante se rige, principalmente, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Sin embargo, también está obligado a sujetarse a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta es la ley suprema en nuestro país, así como a los tratados internacionales que se hayan firmado en la Materia.

En ese tenor, debe tenerse en cuenta que el artículo sexto de nuestra Carta Magna estipula lo siguiente:

***Artículo 6o.*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.* ***El derecho a la información será garantizado por el Estado****.*

*Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.*

***Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:***

***A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

1. ***Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral*** *o sindicato* ***que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito*** *federal, estatal y* ***municipal, es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por , razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.*** *Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*
2. ***La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.***
3. *(…)*

Asimismo, es necesario dejar establecido que el primer y segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

***Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento****. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.*

***Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales****, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición,* ***en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos****, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o* ***para proteger los derechos de terceros.***

De la interpretación de los numerales citados, se tiene que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Por tanto, se puede colegir que la información que posee el Sujeto Obligado respecto de las recetas o notas médicas emitidas por el personal del Hospital Regional de alta Especialidad de Zumpango, en donde se aprecie la firma del médico que recete el medicamento denominado fentanilo, puede calificarse como información de interés público, no simplemente de interés individual, pues en este caso, genera una responsabilidad de rendición de cuentas y por lo tanto, el acto debe ser considerado de escrutinio público, situación que sí es de interés público y general.

Ahora bien, este Instituto se encuentra constreñido a actuar en apego a lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable y bajo diversos principios, entre ellos los de **legalidad** y **objetividad**, entendiendo éstos como sigue:

**Legalidad.** Obligación del Instituto de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables.

**Objetividad.** Obligación del Instituto de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales.

Es importante establecer que, para verificar si es posible dar a conocer un dato considerado como confidencial, es necesario la realización de una prueba de interés público, tal como está estipulado en la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, con número de registro 2016812, que a la letra dispone lo siguiente:

***DATOS PERSONALES. LA PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS AL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LAS PARTES EN LAS LISTAS DE LOS ASUNTOS VENTILADOS ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO IMPLICA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL NI PRECISA, POR ENDE, DE LA ANUENCIA DE AQUÉLLAS.***

***El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, entre otros aspectos relacionados con el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, que la relativa a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos que fijen las leyes; en tanto que la información en posesión de los sujetos obligados es pública****, y sólo podrá reservarse temporalmente en los casos previstos por la ley, entre los que destacan, la posible afectación del interés público, la seguridad nacional, los derechos del debido proceso o la adecuada conducción de los expedientes judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio, así como cuando se ponga en riesgo la vida o la seguridad de una persona.* ***También se establece en dicho precepto constitucional que en la interpretación del derecho mencionado deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. En consecuencia, de acuerdo con los artículos 104, 113, 116 y 120 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública procede restringir el acceso a la información en poder de los sujetos obligados, cuando se clasifique como*** *reservada o como* ***confidencial****. Así, puede considerarse reservada mediante la aplicación de la prueba de daño, si éstos demuestran que con su divulgación se actualizaría alguno de los supuestos legales en que se juzga preferible aplazar su acceso.* ***Tratándose de información confidencial****, los sujetos obligados* ***sólo pueden divulgarla o permitir a terceros acceder a ella*** *si cuentan con el consentimiento de los titulares, o bien, cuando* ***mediante la prueba de interés público, que tiene por objeto distinguir qué información sensible de los gobernados puede ser objeto de divulgación, se corrobore la conexión entre la información confidencial y un tema de interés público, y ponderando el nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por su divulgación y el interés de la colectividad****. Por tanto, la publicación regular de las listas de los asuntos ventilados ante los órganos jurisdiccionales, en las que se indica el nombre o denominación de las partes, y que tiene como objeto dar a conocer a los interesados que en el expediente de que se trata se emitió una resolución, no implica la divulgación de información confidencial ni precisa, por ende, de la anuencia de aquéllas, porque no involucra aspectos relacionados con su vida privada, ni datos personales que ameriten un manejo diferenciado al general. Lo anterior, porque ese elemento se utiliza para identificar el promovente en un proceso judicial, lo cual, por sí solo, no afecta su honor en forma negativa ni genera descrédito a su imagen pública, y mientras no se demuestre que puede ocasionarle daño, no es razonable restringir ese empleo por los órganos jurisdiccionales, en observancia a los principios de transparencia y máxima publicidad.[[2]](#footnote-3)*

En ese sentido, para estar en posibilidades de desclasificar información considerada como confidencial, es necesario que se realice una prueba de interés público, en la que se distinga la información sensible de los gobernados que puede ser objeto de divulgación, en el presente caso, las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe, referido en la solicitud de información de mérito, y se corrobore la conexión entre la información confidencial y un tema de interés público, y la ponderación del nivel de afectación a la intimidad que pueda generarse por su divulgación y el interés de la colectividad.

Es así que, ante una colisión de derechos, el Pleno de este Instituto tiene la facultad de interpretar los ordenamientos aplicables con el propósito de resolver de manera armónica entre los derechos en conflicto, en el presente caso, entre el derecho a la información pública y el derecho a la protección de información susceptible de ser clasificada como confidencial, en concreto , las recetas o notas médicas en las que se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe referido en la solicitud de información de mérito. Lo anterior de acuerdo a los artículos 36 fracción de la Ley de Transparencia local; 82 fracciones I y X de la Ley de Protección de Datos estatal; y artículo 9 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Por tanto, es necesario establecer puntualmente los aspectos a considerar, a fin de llevar a buen término el criterio que prevalecerá en el presente estudio, el cual deberá estar debidamente fundado y motivado como ya ha quedado señalado. En ese orden de ideas, se puntualiza lo siguiente:

* Basándose en su derecho constitucional de acceso a la información**, la Recurrente** solicitó las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe, referido en la solicitud.
* El Sujeto Obligado informó mediante respuesta, que se hace del conocimiento que de acuerdo con lo estipulado en los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud, mediante las cuales refiere que las recetas para medicamentos se considera información confidencial. Derivado de lo anterior, refiere que los medicamentos de la fracción I del artículo 226 de la LGS dice que: los medicamentos deberán prescribirse en recetas especiales con código de barras emitido por médicos autorizados, de acuerdo a lo indicado en el capítulo Receta Médica, así mismo refiere el procedimiento para surtir las recetas electrónicas.
* El Recurrente no concuerda con dicha aseveración debido a que considera que dicha información puede ser entregada en versión pública.
* Este Instituto debe velar por la máxima publicidad de la información pública y el derecho del Recurrente para la obtención de la información solicitada.
* Por otra parte, este Instituto también está obligado a la protección de información susceptible de clasificarse como confidencial, en el caso en concreto, las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe.
* Este Instituto está obligado a actuar conforme lo establecen las leyes vigentes aplicables.

Es así que, en concordancia con el artículo 184 de la Ley de Transparencia local, es menester para la resolución del conflicto entre derechos, el aplicar la prueba de interés público basándose en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Por tanto, se establece lo siguiente:

**IDONEIDAD** (*la legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido*). El Pleno considera que **actos** en el presente caso la solicitud del Recurrente se refiere a las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe en versión pública, es decir salvaguardando los datos de los particulares a los cuales les fue prescrito dicho medicamento, con la finalidad de corroborar que la entrega de dicha información no ocasione una vulneración, causando posibles daños y perjuicios a los ciudadanos a los cuales se les prescribió dicho medicamento. Por lo que se estima que puede existir un interés público lo que es acorde con las excepciones constitucionales a la protección de información referente a la vida privada y datos personales. Así, en el presente asunto, el derecho de acceso a la información pública se adopta como preferente y este contempla un fin constitucionalmente válido que radica en privilegiar la máxima publicidad conforme a lo dispuesto en el artículo 6º constitucional.

**NECESIDAD** (*la falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información para satisfacer el interés público*). En esta etapa es necesario analizar si existe alguna medida alternativa que también pueda resultar idónea que afecten en menor medida los derechos fundamentales en colisión. En el presente caso, no se considera que exista ninguna otra medida más conveniente que el test de proporcionalidad que se está aplicando, en razón de que los dos derechos en conflicto están tutelados por leyes generales y estatales que constriñen a este Instituto a proteger. Por este motivo, se estima que éste es el único medio al alcance de este Órgano Garante para publicar las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe; lo que permitirá que se salvaguarde el derecho de acceso a la información pública del recurrente.

**PROPORCIONALIDAD** (*el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población*). En el caso en concreto, como ya quedo señalado anteriormente, se considera que la solicitud de información es concerniente al objeto de las recetas médicas solicitadas (en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe en versión pública), lo cual es de interés público por la importancia que tiene para la sociedad el conocer que dichos formatos contengan los requisitos y formalidades establecidos en la normatividad aplicable con la finalidad de que no se causen daños o perjuicios a los ciudadanos a los aparezca su nombre en las recetas o notas médicas donde se hayan prescrito el medicamento denominado fentanilo, así como a la población en general, por lo que la afectación a los terceros sería menor a la vulneración de toda una comunidad, puesto que únicamente se proporcionaría las recetas o notas médicas en las cuales se haya recetado el medicamento denominado fentanilo y en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe, pero se protegerían los demás datos personales que les son inherentes, lo que evitará hacer identificables ciudadanos a los cuales se les prescribió dicho medicamento.

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que no existen derechos absolutos y que estos encuentran sus limitantes y restricciones cuando se presentan otros derechos, fines o bienes constitucionales que también deben ser tutelados, para mayor abundamiento resulta aplicable la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con número de Registro 2003269, que a la letra señala lo siguiente:

***DERECHOS FUNDAMENTALES. SUS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS.***

***La teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales establece que contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste resulta ilícita, y sólo en su periferia pueden establecerse las limitaciones y restricciones necesarias y justificadas****, así como expandirse las condiciones de su ejercicio, partiendo de la base de que estos derechos no son absolutos y su ejercicio está sujeto a límites, más allá de los cuales, éste resulta ilegítimo. En estas condiciones, la delimitación de ese núcleo intangible debe ser a partir de la subsistencia del derecho a la libertad y la posibilidad de ejercerlo; esto es, de un efectivo disfrute, de forma tal que los límites internos son aquellos que emergen al momento de definir los alcances del objeto concretamente protegido por cada derecho fundamental, es decir, sirven para definir el contenido del derecho, intrínseco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado, por lo cual cualquier supuesto que desborde esas fronteras es otra realidad carente de protección. Por otro lado,* ***es posible delimitar el campo de acción a partir de las restricciones externas, al existir otros derechos, fines o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de generar la limitación, que alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en los casos concretos, una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses, que pueden apuntar en direcciones distintas e, incluso, opuestas a las que derivan de su contenido normativo****.[[3]](#footnote-4)*

De tal forma que no es posible establecer que el derecho a la protección de los datos personales sea absoluto y en el caso en concreto, el perteneciente a las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe, referidas en la solicitud de información. Así, se debe recordar que el derecho de acceso a la información es considerado como un derecho llave, que abre la posibilidad de acceder a otros derechos. Lo anterior quedó de manifiesto puesto que el máximo Tribunal de nuestro país ha dispuesto que el derecho de acceso a la información tiene una doble naturaleza, pues es un derecho tanto individual como social, según la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte con número de registro 169574, que a la letra establece lo siguiente:

***ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL.***

***El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter: como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos****. En efecto, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado,* ***el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración****. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[[4]](#footnote-5)*

Por lo anterior, resulta evidente que el permitir el acceso a las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe referidas en la solicitud de información, otorga la posibilidad de que se proteja el derecho de acceso a la información pública del recurrente y no se causa ningún tipo de daño o perjuicio a la sociedad, como se desarrolló en párrafos que preceden.

Por lo anterior, es que se colige que el hacer entrega de las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe, favorece a la rendición de cuentas del Sujeto Obligado, por lo que la publicidad de dichos documentos corresponde evidentemente a un tema de interés público.

Es así que la página de Gobierno de México mediante la liga electrónica <https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/informe-de-la-demanda-y-oferta-de-fentanilo-en-mexico-generalidades-y-situacion-actual#:~:text=El%20Fentanilo%20es%20un%20f%C3%A1rmaco,a%20otro%20tipo%20de%20medicamentos>). Establece lo siguiente:

***“Informe de la Demanda y Oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual.***

***El fentanilo es un opioide sintético clasificado en la Ley General de Salud como un estupefaciente cuyo uso médico es legal y está regulado y vigilado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).***

*Comisión Nacional contra las Adicciones | 10 de abril de 2024*

***El fentanilo es un opioide sintético clasificado en la Ley General de Salud como un estupefaciente cuyo uso médico es legal y está regulado y vigilado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)****. El Fentanilo es un fármaco sumamente útil en escenarios clínicos, siendo principalmente empleado en intervenciones quirúrgicas como anestésico y como analgésico para tratar el dolor intenso en diversas condiciones de salud (entre ellas el cáncer o el dolor crónico que es resistente a otro tipo de medicamentos). No obstante, en los últimos años se han presentado casos relacionados con el uso de fentanilo fabricado de manera ilícita que, por la naturaleza de su elaboración clandestina, implica importantes riesgos en la salud de quienes lo consumen.*

*El presente informe representa un acercamiento a la información objetiva, confiable y disponible en nuestro país en relación a la demanda y oferta de fentanilo y su propósito central es brindar una perspectiva amplia y certera de la situación actual, para orientar la toma de decisiones en el tema.*

Derivado de lo anterior, es importante traer a colación lo establecido en el Informe sobre la demanda y oferta de Fentanilo en México (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/910633/Informe_Fentanilo_abril_2024.pdf>), el cual a la letra señala lo siguiente:

***“IV. Situación Actual***

***Demanda***

*Los primeros antecedentes documentados del consumo de fentanilo en México comprenden el periodo del año 2013 al 2017, tiempo en el que ocasionalmente se recibían casos de consumo en centros de tratamiento, en los que los usuarios indicaban consumir fármacos legales usados fuera del contexto médico. A partir de 2018, el número de casos recibidos en tratamiento, cuya sustancia psicoactiva de impacto era el fentanilo (principalmente de tipo ilícito) han crecido consistentemente, contándose en decenas hasta 2020 y en centenas desde 2021.*

*Gráfico

Descripción generada automáticamente*

***Impacto en la Salud Pública***

*El uso de fentanilo fuera de contextos médicos, no solo resulta preocupante por su potencial adictivo, también lo es por el alto riesgo de sobredosis si el consumo es excesivo. Desafortunadamente, con el Fentanilo ilícito se suele desconocer si la cantidad contenida en una dosis puede ser fatal o no (ver Figura 3), en muchas ocasiones, el momento de identificar el riesgo de sobredosis es cuando se consumió la sustancia y esta provoca la intoxicación aguda.*

*Diagrama

Descripción generada automáticamente*

***Urgencias médicas***

*De acuerdo con los casos atendidos en salas de urgencias y de admisión continua del sistema de salud en México, entre 2013 y 2024 se atendieron a 5,901 personas por urgencias relacionadas con el uso de opioides,30 siendo los años 2019 (721 casos), 2022 (713 casos) y 2023 (759 casos), los que mayor número de casos presentaron. En 2023, las entidades con mayor número de casos fueron Baja California (218 casos), Ciudad de México (54 casos), Sinaloa (52 casos), Chihuahua (47 casos),31 aspecto consistente con los estados donde se reporta mayor consumo de Fentanilo (ver Tabla 2).*

*Tabla

Descripción generada automáticamente*

*Tabla

Descripción generada automáticamente*

*Siendo el uso de fentanilo un fenómeno emergente que requiere de monitoreo constante, como parte de los intercambios técnicos entre el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, la Dirección General de Epidemiología y la Dirección General de Información en Salud; a partir del segundo semestre de 2023 el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) estableció el uso emergente del código U9432 para que sea utilizado en todo el sistema de salud para hacer un monitoreo preciso de las atenciones relacionadas con la intoxicación por fentanilo. De acuerdo a los registros realizados de junio de 2023 a enero de 202433, se han atendido 22 urgencias por intoxicación por fentanilo34 en Baja California (7), Ciudad de México (1), Morelos (1), Jalisco (1), Oaxaca (1), Quintana Roo (2), Sinaloa (6), Sonora (2) y Tamaulipas (1).*

***V. Factores que contribuyen al fenómeno del tráfico y consumo de Fentanilo***

*Condiciones que favorecen la expansión de los mercados del fentanilo La preferencia en el uso de opioides en los Estados Unidos ha significado grandes cambios en los mercados internacionales de las drogas. El Congreso de los Estados Unidos indicó que antes de 2019, China era la principal fuente de exportaciones de fentanilo y sustancias relacionadas con destino a los Estados Unidos, a través de operaciones de correo internacional y paquetería. Después de que China impusiera controles más severos a todas las sustancias psicoactivas relacionadas con el fentanilo, organizaciones criminales en México incursionaron en el mercado, sintetizando la sustancia en laboratorios clandestinos. En este contexto, el tráfico ilícito de fentanilo ha resultado un negocio muy atractivo y lucrativo, ya que los cárteles no requieren de tierras, de trabajadores que cuiden de plantíos o esperar los tiempos de cultivo, sin mencionar que la inversión económica suele ser mucho más baja y las ganancias mucho más altas.*

*En resumen, muchas son las condiciones que han favorecido la producción y el tráfico de fentanilo, siendo las principales:*

* ***La rentabilidad:*** *el fentanilo actualmente es más rentable para los grupos de la delincuencia organizada, debido a que, en comparación con otras drogas ilegales, tiene una potencia extremadamente alta, lo que permite obtener mayores ganancias con volúmenes más pequeños de producción.*
* ***La síntesis es relativamente sencilla****: la síntesis de sustancias psicoactivas como el fentanilo y sus análogos puede ser menos complicada, en comparación con la fabricación de otras sustancias psicoactivas. En este sentido, se ha identificado que la producción de fentanilo puede llevarse a cabo en laboratorios clandestinos sumamente improvisados y ante el déficit de precursores en el mercado, pueden emplearse diversas rutas de síntesis para producir la misma sustancia.*
* ***Tráfico internacional****: la producción y tráfico de fentanilo a menudo involucra diversas redes criminales que operan a nivel internacional; por ejemplo, se ha encontrado que muchos precursores y pre-precursores circulan por diversas rutas internacionales entre Asia y América, para ser sintetizados en la Región y finalmente, llegar a los Estados Unidos.*
* ***Internet y dark web:*** *la facilidad de acceso a información y materiales a través de Internet, incluida la dark web, ha facilitado la compra y producción de fentanilo y otros opioides sintéticos. En México, se cree que los principales grupos del crimen organizado han utilizado la dark web para negociar la adquisición y el envío de precursores a través de servicios legítimos de transporte aéreo o contenedores marítimos.*
* ***Regulación de precursores químicos:*** *la falta de regulación sobre los precursores químicos utilizados en la síntesis de fentanilo puede facilitar su producción clandestina. Si bien en México existe una estrategia importante de regulación, control y vigilancia de precursores y sustancias de uso dual, se ha identificado que el constante cambio en las rutas de síntesis de fentanilo genera el comercio de nuevos químicos, por lo que el esfuerzo de controlarlos debe ser constante y permanente.*
* ***Desafíos en la detección:*** *los retos en la detección y control del fentanilo son significativos, ya que la sustancia es altamente potente y puede pasar desapercibida al ser transportada en pequeñas cantidades. Por ejemplo, se ha detectado que las transacciones mediante el uso de las plataformas de redes sociales disminuyen la posibilidad de detección y que el escaso volumen de los paquetes traficados, suele representar un importante reto para la vigilancia en los servicios postales o de mensajería.*

***Políticas de regulación y control***

*En México, los opioides como el fentanilo se encuentran clasificados como estupefacientes en la Ley General de Salud y, por ende, toda su cadena de suministro es altamente controlada en el país. En este sentido, la producción, transportación, venta y otras actividades que no cuenten con autorización sanitaria constituyen delitos contra la salud, que están penados por la Ley antes mencionada y por el Código Penal Federal.*

*En materia de salud, instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es la autoridad encargada del control sanitario de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias químicas que pueden ser empleadas en la industria farmacéutica para la fabricación ilícita de drogas. En este sentido, la COFEPRIS lleva a cabo acciones administrativas como la emisión de autorizaciones, evaluación de avisos, ejecución de visitas de verificación a establecimientos que manejan estas sustancias, así como la determinación de medidas de seguridad aplicables a los mismos en caso de incumplimiento. Del mismo modo, establece las reglas para que los profesionales de la salud prescriban estupefacientes o psicotrópicos y para ello, emite recetarios con códigos de barras para favorecer la disponibilidad y el control de su venta.*

*Por otro lado, la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos se encarga de regular y establecer los mecanismos para controlar la producción, preparación, venta, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos, para prevenir, detectar y evitar su desvío o uso para la producción de drogas sintéticas. En este contexto, diversas instituciones participan y colaboran en el Grupo Interinstitucional para el Control de Drogas Sintéticas para lograr este objetivo, proponiendo y revisando de manera continua la incorporación de sustancias en la Ley o en listas de vigilancia (para químicos esenciales o sustancias de uso dual). De esta forma, el grupo ha favorecido la vigilancia de más de sustancias, entre las que se encuentran diversos precursores del fentanilo.*

*Otra acción relevante en materia de control consiste en que durante 2023 se aprobó una reforma a la Ley de Precursores, para actualizar las penas relacionadas con el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, tales como el fentanilo. Además, crea el Sistema Integral de Sustancias (SISUS), operado por la COFEPRIS, para realizar los trámites administrativos relacionados con actividades reguladas que involucren a estas sustancias o las máquinas para elaborar tabletas, a fin de conocer su ubicación, cantidad, tipo de precursor químico o máquina utilizados.*

*Al mismo tiempo, se han asignado labores a la Guardia Nacional, con el objetivo de mejorar la detección de precursores químicos y, con ello, evitar su desvío, incrementar los decomisos de sustancias y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos que conllevan a diversos riesgos, como la trata de personas, la contaminación ambiental o la violencia, especialmente en las localidades en las que se instalan.”*

Por tanto, después de realizar la ponderación entre los derechos en colisión, el Pleno de este Instituto considera que, en este caso en particular, es preferible que las recetas o notas médicas en las cuales se recete el medicamento denominado fentanilo, en las cuales se aprecie la firma del médico que lo prescribe se entreguen en versión pública, pues esto implica un interés público mayor para la sociedad con respecto al menoscabo del derecho de protección de datos personales de los ciudadanos de los cuales aparezca su nombre en las recetas solicitadas, puesto que únicamente se dejara visible la información señalada y se protegerán los demás datos personales que estén contenidos en las recetas solicitadas.

Por lo que se advierte que el Sujeto Obligado cuenta con atribuciones para emitir el documento donde consta lo solicitado por la hoy parte Recurrente, el cual corresponde a las recetas médicas en las cuales se prescriba el medicamento denominado fentanilo del periodo comprendido del primero de enero de dos mil veintiuno al catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

1. ***DE LA VERSIÓN PÚBLICA.***

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

***IX.******Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX.******Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI.******Información confidencial****: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 51.*** *Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información* ***y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada.*** *Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.*

***Artículo 52.*** *Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.”*

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que efectúen deberá estar justificado en la Ley.

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares y de los servidores públicos toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

En efecto, toda la información relativa a una persona física que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4 fracción XI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial, que debe ser protegida por el Sujeto Obligado, en ese contexto, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

Robustece lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2518 del Tomo XXII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, de rubro y texto siguientes:

*"****TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 3o., FRACCIÓN II, Y 18, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD, AL TUTELAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SÓLO DE LAS PERSONAS FÍSICAS.*** *Si se toma en cuenta que la garantía constitucional indicada no implica que todos los sujetos de la norma siempre se encuentren en condiciones de absoluta igualdad, sino que gocen de una igualdad jurídica traducida en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado, se concluye que los artículos 3o., fracción II, y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al tutelar sólo el derecho a la protección de datos personales de las personas físicas y no de las morales, colectivas o jurídicas privadas, no violan la indicada garantía contenida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal distinción se justifica porque el derecho a la protección de los datos personales se refiere únicamente a las personas físicas por estar encausado al respeto de un derecho personalísimo, como es el de la intimidad, del cual derivó aquél. Esto es, en el apuntado supuesto no se actualiza una igualdad jurídica entre las personas físicas y las morales porque ambas están en situaciones de derecho dispares, ya que la protección de datos personales, entre ellos el del patrimonio y su confidencialidad, es una derivación del derecho a la intimidad, del cual únicamente goza el individuo, entendido como la persona humana."*

Por ende, en el presente caso el Sujeto Obligado sólo podrá testar los datos referidos con antelación, clasificación que tiene que efectuar mediante las formalidades que la Ley impone, es decir, resulta necesario que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado emita el Acuerdo de Clasificación correspondiente debidamente fundado y motivado, que sustente la versión pública, el cual deberá cumplir cabalmente con las formalidades previstas en el artículo 137, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como con los numerales aplicables de los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas**, publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, mediante Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lo anterior es así, puesto que ha de destacarse que el artículo 91, de la Ley de la Materia, dispone que el acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.

En el caso específico, de los documentos solicitados pudieran obrar datos que son considerados confidenciales, cuyo acceso debe ser restringido, los cuales deben testarse al momento de la elaboración de versiones públicas, como es el caso del **Nombre del paciente, Clave ISSEMYM, Diagnóstico del paciente, Domicilio, Firma del Paciente**.

* **NOMBRE DEL PACIENTE**: Designa e individualiza a una persona, puesto que se compone con el sustantivo propio y el primer apellido del padre, y el primer apellido de la madre, en el orden que de común acuerdo determinen, ello atendiendo a lo previsto en los artículos 2.13 y 2.14 del Código Civil del Estado de México. Circunstancia anterior que de ser visible y otorgarse por este Sujeto Obligado, de manera general y pública se vulneraría el derecho a la protección de datos personales de la persona misma, esto debido a la divulgación innecesaria del nombre del particular, sin que exista consentimiento para ello, lo que haría ampliamente identificable al individuo respecto del documento que se trata o la actividad que se refiere, estando ante la posibilidad de manera directa de conocer el nombre específico del sujeto en el caso en concreto.
* **CLAVE DE CUALQUIER TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL** (ISSEMYM, u otros): está integrado por una secuencia de números con los que se identifica a los trabajadores que cubren las cuotas respectivas, asimismo, lo identifica con la fuente de trabajo; por lo que al ser una clave de identificación de los trabajadores, constituye información confidencial, dato que únicamente le atañe al servidor público, por lo que constituye un dato personal que concierne a una persona física identificada e identificable en términos de los artículos 2 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.
* **DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE:** Proceso en el que se identifica una enfermedad, afección o lesión por sus signos y síntomas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedades o afecciones. Derivado de la naturaleza de dicha información, de ser visible y otorgarse por este Sujeto Obligado, de manera general y pública se vulneraría el derecho a la protección de datos personales de la persona misma, esto debido a la divulgación innecesaria del diagnóstico establecido en las recetas o notas médicas, sin que exista consentimiento para ello, en virtud de no favorecer en la transparencia y rendición de cuentas, sino, por el contrario con ello se violentaría la protección de información confidencial, porque incide en la intimidad de un individuo identificado.
* **DOMICILIO PARTICULAR:** De acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas; además que tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios.

De la misma manera, lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, al precisar que el domicilio de personas físicas, es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, donde residan o el lugar donde se encuentren.

En ese contexto, la dirección o domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que, permite hacerlo identificable y ubicable, propiciando que pueda ser molestado en su casa o negocio, de este modo, los datos que permiten a cualquier individuo con esfuerzos mínimos identificar el lugar de residencia o de trabajo constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. Por lo tanto, se actualiza la clasificación, de conformidad con la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **FIRMA DE PACIENTES:** En principio, cabe señalar que la firma corresponde de aquellas personas físicas que fueron a solicitar un trámite o servicio al Sujeto Obligado, por lo que, no se trata de empleados o servidores públicos de este, sino de particulares.

En ese contexto, la firma es considerada un dato personal, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados; por lo que, al tratarse de un dato concerniente a una persona física, es considerada confidencial, ya que también haría identificable a los individuos en cuestión.

Además, es un dato que exterioriza su voluntad para solicitar un trámite o servicio al Sujeto Obligado; por lo que, se actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **FIRMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**: Al respecto, cabe precisar que si bien la firma, por regla general, es un dato personal confidencial, también lo es que, da cuenta de las obligaciones del servidor público para ingresar al servicio público.

Sobre esta situación, cabe señalar que la firma de servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública es información de naturaleza pública, pues documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, lo cual acontece en el presente caso, pues, por una parte, corresponde a los requisitos que el servidor público debió cumplir para ingresar al servicio público.

Situación que se robustece, con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con número de registro SO/002/2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

*“Firma y rúbrica de servidores públicos. Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.”*

Conforme a lo expuesto, no procede la clasificación, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en las recetas o notas médicas expedidas.

* **ESPECIALIDAD DEL MÉDICO:** Según la Secretaría de Educación Pública mexicana (SEP), se refiere a los estudios orientados a la formación de individuos capacitados para el estudio y tratamiento de problemas específicos de un área particular de una profesión. La especialidad de servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública es información de naturaleza pública, pues documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, lo cual acontece en el presente caso, pues, corresponde a los requisitos que el servidor público debió cumplir para ingresar al servicio público de ser el caso.

Por ende, en el presente caso el Sujeto Obligado debe atender las disposiciones en materia de protección de datos, a fin de salvaguardar los datos de particulares testando estos y emitir el debido Acuerdo que sustente la versión pública que se genere, ya que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que es necesario que el Sujeto Obligado cuando clasifique un documento, ya sea en todo o en parte, debe atender lo dispuesto por la Ley de la materia, siendo que dicha clasificación es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, teniendo el deber los primeros, de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de la información, para que luego ésta se presente ante el Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y finalmente sea éste último quien apruebe, modifique o revoque la clasificación de la información solicitada.

Así, es que el Sujeto Obligado deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos señalados en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; máxime que de conformidad con lo establecido en las Leyes y Lineamientos citados, para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley que expresamente le otorga el carácter de confidencial.

Ello, sin pasar por alto que la clasificación respectiva tiene que cumplirse mediante las formalidades impuestas por la ley; es decir, mediante Acuerdo debidamente fundado y motivado, en términos de los numerales 49 fracción VIII y 132 fracciones I, II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

***“Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII.*** *Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.****”***

***“Segundo.-*** *Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

*…*

***XVIII.******Versión pública:*** *El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***Cuarto.*** *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto.*** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los Sujetos Obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***Sexto.*** *Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de que se genere la información o cuando éstos no obren en sus archivos.*

*La clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público.*

***Séptimo.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente, o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la clasificación al momento de la recepción de una solicitud de acceso a la información, para verificar si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo.*** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

*Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.*

*Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.*

***Noveno.*** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo.*** *Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre Sujetos Obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.****”***

De este modo, como ha sido señalado en la presente resolución, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de particulares mediante el debido Acuerdo fundado y motivado en el que el Sujeto Obligado precise las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, asimismo, es claro que el mismo debe aplicar de manera restrictiva y limitada las hipótesis de clasificación y no hacerlas valer de manera general. Es importante señalar que, para acreditar dichos supuestos jurídicos se debe fundar y motivar correctamente la categorización de la información.

Por tanto, la fundamentación y motivación consiste en la obligación que tiene todo ente público de expresar los preceptos jurídicos aplicables al asunto motivo del acto y las razones o argumentos de su actuar.

Al respecto, el máximo tribunal del país ha establecido jurisprudencia respecto a qué debe entenderse por fundamentación y motivación, en los siguientes términos:

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.*** *La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

Así, en un acto de autoridad se surte la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho.

Más aún, a través de diversa jurisprudencia dictada por el Poder Judicial de la Federación se sostiene que la finalidad de la fundamentación o motivación es la de explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión de la autoridad:

***FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN****. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.*

En consecuencia, la fundamentación y motivación implica que en el acto de autoridad, además de contenerse los supuestos jurídicos aplicables se expliquen claramente, por qué, a través de la utilización de la norma se emitió el acto. De este modo, la persona que se siente afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia del Sujeto Obligadoque la sustente, en el que se expongan los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que el no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos, ya sea porque se testan o suprimen, deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundados los motivos de inconformidad vertidos por **la Recurrente**, por ello con fundamento en la *primera hipótesis* del artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **MODIFICA** la respuesta a la solicitud de información **00135/HRZUM/IP/2024,** que ha sido materia del presente fallo.

**SE RESUELVE**

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **Sujeto Obligado** a la solicitud de información número **00135/HRZUM/IP/2024**, por resultar fundados los motivos de inconformidad vertidos por la parte **Recurrente**, en términos del Considerando **CUARTO** de esta resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al **Sujeto Obligado,** realizar una búsqueda exhaustiva y razonable a fin de entregar al **Recurrente,** a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, en versión pública, donde conste lo siguiente:

1. Las recetas médicas en las cuales se prescriba el medicamento denominado fentanilo del periodo comprendido del primero de enero de dos mil veintiuno al catorce de marzo de dos mil veinticuatro.

*Para la entrega en versión pública deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen y se ponga a disposición del recurrente.*

**TERCERO.** **NOTIFÍQUESE** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, vía **SAIMEX** para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO**. **Notifíquese** la presente resolución a la Recurrente mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), y hágase de su conocimiento que, en caso de considerar que la presente resolución le cause algún perjuicio, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

ASÍ LO ACORDÓ, POR MAYORÍA DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA Y GUADALUPE RAMIREZ PEÑA (EMITIENDO VOTO DISIDENTE); EN LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VIENTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JMV/CCR/fjjc

1. Estudio oficioso o a petición de parte que no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia, ya que éste no se coarta por regular causas de improcedencia y sobreseimiento con tales fines, sirviendo de sustento la tesis aislada XVI.1o.A.T.2 K visible en el Semanario Judicial de la Federación bajo el número de registro 2000365 cuyo rubro y texto estipula lo siguiente:

   ***IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.***

   *Del examen de compatibilidad de los artículos*[*73 y 74 de la Ley de Amparo*](about:blank)*con el artículo*[*25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*](about:blank)***no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo,*** *en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.* [↑](#footnote-ref-2)
2. Tesis: I.1º.A.E.229 A (10ª), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 54, t. III, mayo de 2018, pág. 2487. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tesis: I.4º.A.17 K (10ª), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIX, t. 3, abril de 2013, pág. 2110. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tesis: P./J. 54/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, junio de 2008, pág. 743. [↑](#footnote-ref-5)